



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
6 de junio de 2002  
Español  
Original: inglés

---

### **Carta de fecha 6 de junio de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo**

Me dirijo a usted en relación con mi carta de fecha 3 de mayo de 2002 (S/2002/524).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe complementario adjunto presentado por el Japón de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001).

Le agradeceré que tenga a bien disponer que la presente carta y los materiales adjuntos se distribuyan como documento del Consejo de Seguridad.

*(Firmado)* Jeremy **Greenstock**  
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad  
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)  
relativa a la lucha contra el terrorismo



## **Anexo**

### **Nota verbal de fecha 31 de mayo de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por la Misión Permanente del Japón**

El Representante Permanente del Japón ante las Naciones Unidas saluda al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001), de 28 de septiembre de 2001 relativa a la lucha contra el terrorismo, y, en cumplimiento del párrafo 6 de dicha resolución y en respuesta a la carta del Presidente del Comité de fecha 1º de mayo de 2002, tiene el honor de transmitirle el segundo informe del Gobierno del Japón acerca de las medidas que ha tomado para aplicar la resolución mencionada (véase el documento adjunto).

**Documento adjunto**

**Japón**

**Informe adicional presentado al Comité contra el Terrorismo  
en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001)  
del Consejo de Seguridad, de 28 de septiembre de 2001\***

---

\* Los anexos se encuentran archivados y pueden ser consultados en la oficina.

**Informe adicional presentado al Comité contra el Terrorismo  
en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001)  
del Consejo de Seguridad, de 28 de septiembre de 2001**

1. El Gobierno del Japón suministra la siguiente información adicional en respuesta a las observaciones/preguntas formuladas en la carta del Embajador Jeremy Greenstock, Presidente del Comité contra el Terrorismo, de fecha 1º de mayo de 2002 (S/AC.40/2002/MS/OC.70).

**• Párrafo 1, inciso a)**

*– Aparte de los bancos, ¿están las personas naturales o jurídicas (por ejemplo, abogados, notarios y otros intermediarios) obligadas a comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades públicas? En caso afirmativo, ¿qué sanciones se aplican a las personas que omitan hacer la comunicación, intencionalmente o por negligencia?*

2. Los abogados no están obligados a comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades públicas. En el Japón, los abogados tienen el derecho y el deber de mantener la confidencialidad de los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus funciones como tales. Por consiguiente, si se impusiera a un abogado la obligación de comunicar las transacciones financieras sospechosas se causarían graves problemas, entre ellos, la infracción de su deber de mantener la confidencialidad, y se perjudicaría la relación de confianza entre el abogado y su cliente.

3. Como los notarios japoneses no intervienen en transacciones financieras, no están especialmente obligados a comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades públicas.

4. Las instituciones financieras, entre ellas, los bancos, las empresas de seguros, las empresas de valores y demás instituciones sujetas a la Ley sobre identificación de los clientes por parte de las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Cuando una autoridad competente estime que no se ha cumplido la obligación de comunicación, puede dirigir una orden administrativa a la institución financiera de que se trate a fin de que cumpla la exigencia, pero no se impondrá sanción alguna.

*– En su calidad de miembro del G-20, el Japón se ha comprometido a poner fin a los abusos de las redes bancarias no constituidas oficialmente. ¿Cómo se ha reflejado, o se reflejará, dicho compromiso en la legislación japonesa?*

5. Con arreglo a la Ley de Bancos, los servicios bancarios sólo pueden ser prestados por bancos autorizados. Si una persona se dedica a actividades bancarias sin autorización, se le impondrá una pena de multa o prisión con arreglo a la Ley.

*– ¿En el Japón se han promulgado normas legislativas de lucha contra el blanqueo de dinero?*

6. Sí, el Japón ha promulgado la Ley para el castigo de la delincuencia organizada, el control del producto de los delitos y otros asuntos.

• **Párrafo 1, inciso b)**

- *Sírvase suministrar un informe sobre los progresos logrados en las enmiendas de la legislación penal en preparación con objeto de permitir que el Japón pase a ser parte en el Convenio para la represión de la financiación del terrorismo.*

7. El 12 de marzo, el Gobierno presentó a la Dieta, junto con el Convenio, un proyecto de ley que contenía las medidas legislativas necesarias para aplicar la Convención y la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la Cámara de Representantes ya ha aprobado dicho proyecto de ley, y, al 30 de mayo, el Gobierno está a la espera de que la Cámara de Consejeros lo considere. El 17 de mayo, el Gobierno obtuvo la aprobación de la Dieta para la concertación del Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, y se propone depositar el instrumento de aceptación ante el Secretario General de las Naciones Unidas una vez que el proyecto de ley indicado se haya aprobado en el período de sesiones plenarias de la Dieta en curso. En caso de que se realicen nuevos progresos a este respecto, oportunamente se proporcionará información adicional.

8. La ley de referencia tiene el objetivo de hacer posible el castigo de la financiación del terrorismo incluso en la etapa en que un infractor principal aún no haya iniciado una acción delictiva abierta en relación con el suministro o la recaudación de fondos, independientemente de si posteriormente el acto de ese autor principal se lleva a cabo o no.

• **Párrafo 1, inciso c)**

- *Sírvase aclarar de qué forma se congelan, con arreglo a la legislación vigente, los fondos, activos financieros o recursos económicos de los terroristas o las entidades terroristas, si sus nombres no figuran en las listas llevadas por los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*

9. La Ley del Japón sobre cambios y comercio exterior permite que el Ministro de Finanzas o el Ministro de Economía, Comercio e Industria bloquee los activos de no residentes o restrinja los pagos hechos desde el Japón a países extranjeros o los pagos entre residentes y no residentes, mediante un sistema de licencias. Después del 11 de septiembre de 2001, de conformidad con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno del Japón ha tomado medidas para congelar los activos de 22 personas y entidades que no aparecen en las listas llevadas por los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- *¿Qué normas legislativas existen para congelar los activos de quienes hayan sido designados por las Naciones Unidas como terroristas u organizaciones terroristas?*

10. La Ley sobre cambios y comercio exterior y la Ley de control de cambios.

- *El Comité contra el Terrorismo espera recibir un informe sobre los progresos realizados en lo tocante a las mejoras proyectadas respecto de los mecanismos para la congelación de fondos, activos financieros y recursos económicos de los terroristas y las organizaciones terroristas.*

11. El 24 de abril de 2002, se enmendó la Ley sobre cambios y comercio exterior a fin de facilitar el intercambio de información entre los ministerios y organismos

competentes en relación con las medidas de congelación. La Ley enmendada entró en vigencia el 7 de mayo. En dicha Ley enmendada se establecen la base jurídica y los procedimientos para compartir la información relacionada con los terroristas.

12. Con la revisión de la Ley sobre cambios y comercio exterior, el mecanismo de coordinación entre las autoridades pertinentes fue institucionalizado dentro del Gobierno con el nombre de “*Comité de enlace para la congelación de los activos de terroristas*” (anexo 1).

• **Párrafo 1, inciso d)**

– *¿Cómo se asegura el sistema de rastreo financiero de que los fondos recibidos por asociaciones no se desvíen de sus fines declarados y se destinen a actividades terroristas?*

13. Con arreglo al sistema actual, las instituciones financieras están obligadas a comunicar las transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con algunos delitos graves. Consecuentemente, de conformidad con la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se tomó nota de que los talibanes se habían beneficiado del opio ilícito, las transacciones sospechosas de estar vinculadas con entidades relacionadas con los talibanes se comunican a la Oficina de Inteligencia Financiera del Japón (OIFJ) del Organismo de Servicios Financieros (OSF). La OIFJ recibe y analiza esas comunicaciones, y difunde la inteligencia a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

14. Con la enmienda de la legislación que está considerando la Dieta en el período de sesiones en curso, se tipificarán como delito los actos de financiación de terroristas, y se impondrá a las instituciones financieras la obligación de comunicar las transacciones sospechosas de vinculación con una actividad terrorista. Con ello se alentará a las instituciones financieras a considerar si una transacción puede estar vinculada con la financiación de terroristas, y, cuando se considere que lo está, la institución financiera estará obligada a comunicar esas transacciones sospechosas a la OIFJ y al OSF. La OIFJ recibe y analiza esas comunicaciones, y difunde la inteligencia a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

15. Además, con arreglo a la Ley sobre identificación de los clientes por parte de las instituciones financieras, sancionada en el período de sesiones en curso de la Dieta, las instituciones financieras estarán obligadas a confirmar y registrar la identificación de los clientes, sobre la base de documentos emitidos por órganos públicos. Con ello se fortalecerá el mencionado sistema de presentación de informes sobre la financiación del terrorismo, facilitando la reunión y la conservación de la información relativa a la identificación de los clientes, sin que éstos adviertan esa actividad. El incumplimiento de la ley determinará la aplicación de sanciones a las instituciones financieras, así como a los clientes que formulen declaraciones fraudulentas sobre sus documentos de identificación.

• **Párrafo 2, inciso a)**

– *Sírvase aclarar si, con arreglo a la “Ley relativa al control de las organizaciones que cometen actos de asesinato indiscriminado en masa”, el reclutamiento de miembros de dichas organizaciones sólo puede ser prohibido después de que una organización haya cometido un acto de asesinato indiscriminado en masa.*

16. No se tomarán medidas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, inciso 4) del artículo 8 de la “Ley relativa al control de las organizaciones que cometen actos de asesinato indiscriminado en masa” en los casos en que una organización haya llevado a cabo actos de asesinato indiscriminado en masa sólo en el pasado.

17. Cuando la Comisión de Examen de la Seguridad Pública adopta una medida con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, inciso 4), del artículo 8, es necesario que la organización que llevó a cabo actos de asesinato indiscriminado en masa en el pasado esté comprendida en uno o más de los rubros del párrafo 1, incisos 1) a 8), del artículo 8, o que la organización respecto de la cual se hayan tomado medidas de vigilancia (con arreglo al artículo 5) haya violado la obligación de presentar informes (párrafo 2 ó 3 del artículo 5) o la obligación de aceptar una inspección en el lugar (párrafo 2 del artículo 7).

18. La expresión “asesinato indiscriminado en masa” comprende la tentativa de llevar a cabo actos de asesinato indiscriminado en masa. En los casos en que la organización haya intentado llevar a cabo el asesinato de numerosas personas no determinadas, y al mismo tiempo se hayan cumplido los requisitos antes mencionados, podrán tomarse las medidas previstas en el párrafo 2, inciso 4) del artículo 8.

– *¿Cómo reprime la legislación japonesa el reclutamiento de grupos terroristas que no han cometido actos de asesinato indiscriminado en masa, es decir, el asesinato de numerosas personas no determinadas (artículo 4 de la ley mencionada), pero se proponen cometer otros actos terroristas o ya han cometido o intentado cometer tales actos, dentro o fuera del Japón?*

19. En los casos en que los actos terroristas estén comprendidos en el alcance de la definición de actividad subversiva terrorista con arreglo al artículo 4 de la “Ley sobre prevención de actividades subversivas”, y en que la Comisión de Examen de la Seguridad Pública encuentre motivos suficientes para determinar que una organización que ha llevado a cabo los mencionados actos terroristas mediante su actividad también llevará a cabo en el futuro cualquier forma de actividades subversivas de esa índole, continua o repetidamente, se podrán tomar cualesquiera de las medidas siguientes:

- 1) En caso de que dicha actividad subversiva terrorista se haya llevado a cabo en una manifestación de masas o una procesión o una reunión pública, se prohibirán todas las manifestaciones, procesiones o reuniones públicas, en cualquier lugar, por un plazo determinado no superior a seis meses;
- 2) En caso de que dicha actividad subversiva terrorista haya comprendido la impresión o distribución de un periódico y haya sido llevada a cabo por conducto de cualquier órgano de la organización, se prohibirá la impresión o la distribución de ejemplares de dicho periódico por un plazo determinado no superior a seis meses;
- 3) Se prohibirá a cualquier autoridad, funcionario o miembro de la organización que haya participado en dicha actividad subversiva terrorista que ejecute cualquier clase de actos en interés de la organización por un plazo determinado no superior a seis meses.

20. En los casos en que cualquiera de las medidas comprendidas en el párrafo 1 del artículo 5 de la Ley sobre prevención de actividades subversivas no elimine efectivamente el peligro de la mencionada repetición de actividades subversivas en

el futuro, podrán tomarse medidas para declarar disuelta a cualquier organización (artículo 7). Con la declaración de disolución, quedará prohibido todo acto cumplido en interés de la organización (incluido el reclutamiento de miembros) por cualquier persona que haya sido autoridad, funcionario o miembro de la organización (artículo 8 de la “Ley sobre prevención de actividades subversivas”).

21. Como se mencionó anteriormente, se requieren condiciones muy estrictas para disponer tanto la “restricción de la actividad de la organización” como la “declaración de disolución” con arreglo a la “Ley sobre prevención de actividades subversivas”; por lo tanto, hasta la fecha no se ha tomado ninguna de tales medidas.

– *Sírvase explicar cómo están reglamentadas la venta, la adquisición y la posesión de armas en el Japón.*

22. Las reglamentaciones sobre armas de fuego en el Japón han sido establecidas para hacer frente a diversos objetivos y tipos determinados de armas de fuego. La ley básica en que se expresa tal reglamentación es la Ley de control de las armas de fuego y las armas blancas, que reglamenta la posesión y la importación de armas de fuego (armas de mano, fusiles militares, ametralladoras, escopetas, escopetas de caza y cualquier otro tipo de armas de fuego cargadas con pólvora, y armas de aire comprimido). Está complementada por la Ley sobre la fabricación de pertrechos, que reglamenta la fabricación y el comercio de armas de fuego. Asimismo existen disposiciones sobre armas de fuego en la Ley de aduanas, la Ley sobre aranceles aduaneros y la Ley relativa a la caza y a la protección de la fauna.

23. Las municiones empleadas para las armas de fuego están reglamentadas en la Ley sobre control de explosivos y la posesión y la importación están reglamentadas por la Ley de control de las armas de fuego y las armas blancas. Las municiones usadas para las armas de mano, los fusiles militares, las ametralladoras y las escopetas también están reglamentados en la Ley sobre la fabricación de pertrechos, y su importación está reglamentada en la Ley de aduanas y la Ley sobre aranceles aduaneros.

– *Sírvase reseñar las medidas legislativas y prácticas tendientes a impedir que entidades e individuos recluten, recauden fondos o procuren obtener otras formas de apoyo para actividades terroristas a llevarse a cabo dentro o fuera del Japón, y en particular:*

- *La realización, dentro del Japón o desde su territorio, de actividades de reclutamiento, recaudación de fondos o búsqueda de otras formas de apoyo de otros países; y*
- *Las actividades engañosas, por ejemplo, el reclutamiento sobre la base de hacer creer a la persona reclutada que el reclutamiento tiene un objetivo (por ejemplo, enseñanza) distinto del verdadero, y la recaudación de fondos por conducto de organizaciones de fachada.*

24. La Ley de prevención de las actividades subversivas y la Ley relativa al control de las organizaciones que cometen actos de asesinato indiscriminado en masa (en adelante denominada “Ley de control de organizaciones”) prevén medidas contra las actividades mencionadas. El objetivo de dichas leyes es garantizar la seguridad pública en el Japón, y no se aplican directamente a los grupos terroristas y los terroristas en el extranjero. La Ley de prevención de las actividades subversivas prevé medidas encaminadas a restringir la actividad de las organizaciones (artículo 5) y a



la declaración de disolución (artículo 7) y la Ley de control de organizaciones prevé medidas de vigilancia (artículo 5) y medidas para impedir la reincidencia (artículo 8). La declaración de disolución con arreglo a la Ley de prevención de las actividades subversivas y las medidas de prevención de la reincidencia con arreglo a la Ley de control de organizaciones pueden ser medios para prevenir las actividades referidas.

- 1) La declaración de disolución con arreglo a la Ley de prevención de las actividades subversivas

El objetivo de la declaración de disolución es destruir a la organización a que se refiere. Una vez adoptada esa medida, quedará prohibida la realización de cualesquiera actos en interés de la organización a toda persona que haya sido autoridad, funcionario o miembro de ella. Además, tales personas no podrán realizar, bajo ningún nombre, actos tendientes a eludir la prohibición. Pueden quedar comprendidos dentro del ámbito de las conductas prohibidas actos tales como promover el ingreso a la organización, recaudar dinero para la organización y ser apoyado por otra organización o individuo en interés de la mencionada organización. Toda persona que contravenga esa medida estará sujeta a prisión con trabajos forzados por una duración no mayor de tres años o a multa de hasta 50.000 yen.

Esta medida será tomada en los casos en que la organización haya llevado a cabo, mediante sus actividades, cualquier clase de actividad subversiva terrorista, y existan motivos suficientes para determinar que existe un claro peligro de que dicha organización lleve a cabo en el futuro cualquier clase de actividad subversiva terrorista en forma continua o reiterada, y que las medidas adoptadas con arreglo al artículo 5 no serán suficientes para eliminar efectivamente ese peligro.

Es difícil que esos requisitos se cumplan. Por consiguiente, nunca se ha adoptado una declaración de disolución. (Hubo un caso en que una solicitud de declaración de disolución fue denegada.)

- 2) Las medidas para la prevención de la reincidencia con arreglo a la Ley de control de organizaciones

Las medidas para la prevención de la reincidencia limitan las actividades de la organización que incrementan el peligro de que se vuelvan a cometer actos de asesinato indiscriminado en masa. Una vez adoptada esta medida, podrán tomarse las medidas siguientes:

- La prohibición de forzar y promover el ingreso a la organización de que se trata o de impedir el retiro de dicha organización;
- La prohibición de recibir donaciones de dinero, artículos y otros bienes.

Por consiguiente, es posible prohibir las actividades mencionadas. Toda persona que contravenga estas medidas estará sujeta a prisión con trabajos forzados por una duración no mayor de dos años o a multa de hasta 1 millón de yen.

Tales medidas serán adoptadas en los casos en que la organización haya llevado a cabo actos de asesinato indiscriminado en masa mediante sus actividades y demuestre una inclinación a reincidir en la comisión de actos de asesinato indiscriminado en masa y en que resulte necesario impedir el incremento de esa tendencia. Se tomarán las mismas medidas en relación con una organización

respecto de la cual se hayan tomado medidas de vigilancia (artículo 5), cuando, por haberse omitido la presentación de un informe o haberse presentado un informe falso, o por haberse impedido, obstaculizado o impugnado una inspección, resulte difícil evaluar el grado de peligro potencial de que la organización de que se trata vuelva a cometer actos de asesinato indiscriminado en masa.

• **Párrafo 2, inciso b)**

– *Sírvase suministrar al Comité contra el Terrorismo información sobre el mecanismo para la cooperación interinstitucional entre las autoridades encargadas del control de narcóticos, el rastreo financiero y la seguridad, con particular referencia a los controles fronterizos que impidan el movimiento de los terroristas.*

25. En enero de 1997, el Japón estableció la Autoridad Central para la promoción de medidas de prevención del uso abusivo de estupefacientes (presidida por el Primer Ministro) y revisó las medidas de lucha contra los estupefacientes propuestas por los órganos gubernamentales competentes del Japón, y, en mayo de 1998, formuló la Estrategia quinquenal para la prevención del uso abusivo de estupefacientes. La Estrategia se dirige a impedir el contrabando en la frontera; promover la cooperación internacional, inclusive mediante el apoyo a las medidas adoptadas en las regiones en que se producen drogas ilícitas, y el fortalecimiento del control, no sólo del tráfico ilícito y el contrabando de estimulantes de tipo anfetamínico, sino también de los usuarios. Los órganos competentes del Japón están fortaleciendo la cooperación y la colaboración para alcanzar los objetivos de la Estrategia.

26. Con arreglo al sistema vigente, las instituciones financieras están obligadas a comunicar las transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con determinados delitos graves. Consiguientemente, de conformidad con la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo señaló que los talibanes se habían beneficiado del cultivo ilícito del opio, las transacciones sospechosas de vínculos con entidades relacionadas con los talibanes se comunican a la Oficina de Inteligencia Financiera del Japón (OIFJ) del Organismo de Servicios Financieros (OSF). La OIFJ recibe y analiza esas comunicaciones, y difunde la inteligencia a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

27. En julio de 2001, el Japón estableció la Autoridad Central para la promoción de medidas de prevención de la delincuencia organizada internacional. La Autoridad Central, presidida por el Primer Secretario del Gabinete, está integrada por 10 miembros provenientes de la Secretaría del Gabinete y 7 miembros de los ministerios y organismos competentes (Comisión Nacional de Seguridad Pública (Organismo Nacional de Policía), Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Ministerio de Economía, Comercio e Industria y Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte). En agosto de 2001, la Autoridad Central formuló la Estrategia de lucha contra la delincuencia organizada internacional, que comprende el fortalecimiento de las medidas de lucha contra el ingreso y la permanencia ilegales, y el Japón ha ido fortaleciendo la cooperación entre los organismos gubernamentales pertinentes.

• **Párrafo 2, inciso c)**

– *Sírvase suministrar ejemplos de las medidas tomadas, si las hubo.*

28. En aplicación del artículo 5 de la Ley sobre el control de la inmigración y el reconocimiento de la condición de refugiado, los inspectores de inmigración destacados en los puertos de entrada al Japón pueden denegar el descenso en el Japón a las personas que figuran en la lista de alerta, entre ellos, los terroristas.

• **Párrafo 2, incisos d) y e)**

– *¿Ha tipificado el Japón como delito en su derecho interno todas las infracciones enunciadas en los once convenios y protocolos internacionales pertinentes en materia de terrorismo?*

29. El Japón ha tipificado como delito en sus leyes internas todas las infracciones enunciadas en los nueve convenios y protocolos internacionales pertinentes en materia de lucha contra el terrorismo. (De los once convenios de lucha contra el terrorismo en las que el Japón es parte, dos convenios, a saber, el Convenio de 1963 relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (conocido como el “Convenio de Tokio”) y el Convenio de 1991 sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección no prevén infracciones concretas que deban ser castigadas. El Japón ya ha tipificado como delitos a todas las infracciones enunciadas en los convenios restantes.)

– *¿Son todas las disposiciones pertinentes del Código Penal del Japón aplicables en todas las circunstancias siguientes:*

- *Actos cometidos fuera del Japón por una persona que sea ciudadano del Japón o residente habitual del Japón (independientemente de si actualmente se encuentra presente en el Japón o no);*
- *Actos cometidos fuera del Japón por un nacional de otro país que actualmente se encuentra en el Japón?*

30. Algunos delitos graves, como el homicidio, las lesiones personales, la reclusión ilegal, el secuestro, el robo o el incendio intencional cometidos por nacionales del Japón son punibles aunque se hayan cometido fuera del territorio japonés, con arreglo al artículo 3 del Código Penal.

31. Además, el artículo 4-2 del Código Penal habilita a los tribunales japoneses a juzgar a los infractores que hayan cometido delitos comprendidos dentro del Código Penal independientemente de la nacionalidad o del paradero de los infractores, o del lugar en que se hayan cometido los delitos, si el Gobierno del Japón está obligado por tratados internacionales a castigar tales delitos.

– *Varios convenios internacionales relacionados con la prevención y la represión del terrorismo contemplan jurisdicciones optativas respecto de las infracciones enunciadas en ellos, cuando sean cometidas en determinadas circunstancias (artículo 8, párrafo 4, de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares; artículo 6, párrafo 2, del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima; artículo 3, párrafo 2, del Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de plataformas fijas situadas en la plataforma continental; artículo 6, párrafo 2, del Convenio internacional para la represión de los atentados*

*terroristas cometidos con bombas). ¿Ha optado el Japón por establecer su jurisdicción respecto de tales infracciones con arreglo a las disposiciones citadas?*

32. El Japón no ha optado por establecer su jurisdicción respecto de tales infracciones con arreglo a las disposiciones citadas.

*– Sírvase detallar las penas aplicables en caso de comisión de actos terroristas.*

33. Todo acto que configure una infracción comprendida en el alcance de los once tratados y definida en ellos (salvo en el caso del Convenio para la represión de la financiación del terrorismo) es punible con prisión. Por ejemplo, el homicidio, el incendio intencional o la detonación de un explosivo se castiga con pena de muerte o prisión que puede llegar a ser perpetua; el uso de armas biológicas o químicas o el secuestro de aeronaves se castiga con prisión que puede llegar a ser perpetua, y otras formas de terrorismo se castigan con prisión, por lo general de entre diez y quince años.

34. En lo tocante al suministro o la recaudación de fondos, que el Convenio para la represión de la financiación del terrorismo obliga a los Estados partes a tipificar como delito, la Dieta está considerando actualmente un proyecto de ley por el que se tipificaría al suministro o la recaudación de fondos para fines de terrorismo como delito punible con prisión por un término no mayor de diez años o multa de cuantía no mayor de 10 millones de yen.

**• Párrafo 2, inciso f)**

*– ¿Cuáles son las medidas legislativas vigentes o proyectadas para la aplicación del párrafo 2, inciso f), de la resolución, y las instituciones competentes para dicha aplicación?*

35. El Japón presta la asistencia mencionada en el párrafo 2, inciso f), de conformidad con la Ley sobre la asistencia internacional en la investigación, la Ley de extradición y la Ley de asistencia judicial a los tribunales extranjeros.

36. En la Ley sobre la asistencia internacional en la investigación se estipulan los requisitos y procedimientos con arreglo a los cuales el Japón puede dar cumplimiento a los pedidos de asistencia judicial en casos penales provenientes de países extranjeros. En la Ley de extradición se estipulan los requisitos y procedimientos para la extradición de fugitivos a pedido de países extranjeros. En la Ley de asistencia judicial a los tribunales extranjeros se estipulan los procedimientos para que los tribunales japoneses presten asistencia en relación con la comunicación de documentos y la recepción de pruebas en relación con causas civiles o penales a pedido de países extranjeros.

37. Las principales instituciones competentes para la aplicación del párrafo 2, inciso f), son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y el Organismo Nacional de Policía.

*– ¿Cuál es el plazo legal en que debe darse cumplimiento a un pedido de asistencia judicial en investigaciones penales o procedimientos penales en relación con la financiación de actos terroristas o el apoyo a tales actos y cuánto demoraría realmente en la práctica dar cumplimiento a un pedido de esa índole?*

38. No existe un plazo legal dentro del cual deba darse cumplimiento a tales solicitudes. El tiempo que efectivamente lleve responder a dichas solicitudes depende

de las circunstancias de cada caso y del tipo de asistencia solicitada. Cabe señalar que las instituciones competentes hacen todo lo posible por responder a cada una de las solicitudes a la mayor brevedad.

• **Párrafo 3, inciso c)**

– *¿Ha celebrado el Japón acuerdos bilaterales para prevenir y reprimir ataques terroristas y tomar medidas contra los autores de tales actos? En caso afirmativo, ¿con qué países?*

39. El Japón tiene un tratado bilateral de extradición con los Estados Unidos.

– *Sírvase suministrar una lista de los tratados bilaterales de extradición y asistencia mutua judicial en que el Japón sea parte.*

40. El Japón tiene un tratado bilateral de extradición con los Estados Unidos. En el Japón existen algunas leyes relacionadas con la cooperación internacional en causas penales, entre ellas, las siguientes:

- i) La Ley sobre la asistencia internacional en la investigación;
- ii) La Ley de extradición;
- iii) La Ley de asistencia judicial a los tribunales extranjeros;
- iv) La llamada Ley especial de lucha contra los estupefacientes;
- v) La llamada Ley de lucha contra la delincuencia organizada.

41. En la Ley sobre la asistencia internacional en la investigación se estipulan los requisitos y procedimientos con arreglo a los cuales el Japón puede dar cumplimiento a los pedidos de asistencia judicial en casos penales provenientes de países extranjeros. Con arreglo a dicha ley, el Japón puede prestar asistencia en respuesta a una solicitud de un país extranjero aun cuando no exista un tratado, si dicho país da garantías de reciprocidad.

42. En la Ley de extradición se estipulan los requisitos y procedimientos para la extradición de fugitivos a pedido de países extranjeros. Con arreglo a la Ley de extradición, el Japón puede conceder la extradición del fugitivo al Estado requeriente a condición de reciprocidad, aun cuando no exista un tratado.

43. En la Ley de asistencia judicial a los tribunales extranjeros se estipulan los procedimientos para que los tribunales japoneses presten asistencia en relación con la comunicación de documentos y la recepción de pruebas en relación con causas civiles o penales a pedido de países extranjeros, a condición de reciprocidad. Dicha ley difiere de la Ley sobre la asistencia internacional en la investigación principalmente en dos aspectos: en primer lugar, el tribunal es la autoridad que presta la asistencia; en segundo lugar, puede prestarse asistencia no sólo en causas penales, sino también en causas civiles (artículo 1 de la ley).

44. El Japón sancionó la Ley especial de lucha contra los estupefacientes en 1991, cuando ratificó el Convenio de 1988 de las Naciones Unidas y puso en práctica las 40 recomendaciones formuladas en 1990 por el Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales. La Ley contiene varias disposiciones sobre asistencia mutua judicial en los casos relacionados con estupefacientes. Concretamente, en la Ley especial de lucha contra los estupefacientes se establece un mecanismo de

cooperación internacional encargado de otorgar las solicitudes de decomiso o confiscación de un valor equivalente.

45. Además, el Japón promulgó en 1999 la Ley de lucha contra la delincuencia organizada, que, en lo tocante al producto de los delitos no relacionados con estupefacientes, amplió el alcance del mecanismo de cooperación internacional referente al sistema de decomiso (incluida la confiscación de un valor equivalente) y congelación previsto en la Ley especial de lucha contra los estupefacientes.

– *Sírvase suministrar al Comité contra el Terrorismo un ejemplar de la Ley sobre medidas especiales de lucha contra el terrorismo sancionada por la Dieta el 29 de octubre de 2001.*

46. Véase el documento adjunto (anexo 2).

• **Párrafo 3, inciso d)**

– *Sírvase presentar un informe sobre los progresos realizados en lo tocante a la ratificación del Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Asimismo, sírvase indicar en qué forma se han aplicado internamente los convenios y protocolos pertinentes de los que el Japón es parte.*

47. El 12 de marzo, el Gobierno presentó a la Dieta, junto con el Convenio, un proyecto que contiene las medidas legislativas necesarias para aplicar el Convenio y la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la Cámara de Representantes ya ha aprobado dicho proyecto de ley, y, al 30 de mayo, el Gobierno está a la espera de que la Cámara de Consejeros lo considere. El 17 de mayo, el Gobierno obtuvo la aprobación de la Dieta para la concertación del Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, y se propone depositar el instrumento de aceptación ante el Secretario General de las Naciones Unidas una vez que el proyecto de ley indicado se haya aprobado en el período de sesiones plenarias de la Dieta en curso. En caso de que se realicen nuevos progresos a este respecto, oportunamente se proporcionará información adicional.

48. A continuación figuran las notas sobre la forma en que el Japón está aplicando los once convenios vigentes de lucha contra el terrorismo. La aprobación de la Dieta fue necesaria respecto de la concertación de cada uno de esos convenios, en forma separada de las medidas legislativas que se hayan adoptado para poner en vigor las leyes internas pertinentes.

*[Nota]*

Lista de convenios para cuya aplicación fue necesario promulgar nuevas leyes especiales:

- Convenio de 1963 relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves
- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil
  - Actualmente se encuentran a consideración de la Dieta las nuevas leyes para la aplicación del Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo.

Lista de convenios para cuya aplicación fue necesario reformar algunas de las leyes vigentes:

- Convenio sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas inclusive los agentes diplomáticos
- Convenio internacional contra la toma de rehenes
- Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares
- Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas

Lista de convenios que pueden ponerse en práctica aplicando leyes vigentes, de modo que respecto de ellos no fue necesario tomar medidas legislativas:

- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves
- Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, complementario al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil
- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima
- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de plataformas fijas situadas en la plataforma continental
- Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección.

• **Párrafo 3, inciso e)**

- *¿Se han incluido los delitos enunciados en los convenios internacionales pertinentes como delitos extraditables en los tratados bilaterales en que es parte el Japón?*

49. Sí, los delitos enunciados en los convenios internacionales pertinentes de lucha contra el terrorismo se han incluido como delitos extraditables en los tratados bilaterales de extradición con los Estados Unidos.

• **Párrafo 3, inciso f)**

- *¿Cuál es la base legislativa para las investigaciones que llevan a cabo el Investigador sobre casos de Refugiados y el Ministro de Justicia, y con qué disposiciones concretas se garantiza que no se otorgará la condición de refugiado a ninguna persona involucrada en actividades terroristas?*

50. La competencia del Investigador sobre casos de Refugiados para llevar a cabo averiguaciones de hecho se funda en el artículo 61-2-3 de la Ley sobre el control de la inmigración y el reconocimiento de la condición de refugiado.

51. Si resultase claro que una persona que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado ha estado involucrada en actividades terroristas, el Ministro de Justicia denegará su solicitud con arreglo al artículo 1-8)-2 de la Ley sobre el control de la inmigración y el reconocimiento de la condición de refugiado y el artículo 1, párrafo f, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Además, si un extranjero residente en el Japón que ha sido reconocido como refugiado está involucrado en actividades terroristas, el Ministro de Justicia retirará el reconocimiento de

la condición de refugiado con arreglo al artículo 61-2-2 de la Ley sobre el control de la inmigración y el reconocimiento de la condición de refugiado.

52. Cuando se sabe que un extranjero ha estado involucrado en actividades terroristas antes de haber sido reconocido como refugiado, el reconocimiento se cancelará por tratarse de una decisión administrativa viciada.

(Ley sobre el control de la inmigración y el reconocimiento de la condición de refugiado)

(Definición)

Artículo 2. Los términos empleados en la presente Ley sobre el control de la inmigración y el reconocimiento de la condición de refugiado y las resoluciones que se expidan con arreglo a tal Ley se definirán en la forma siguiente:

3)-2 Refugiado: Un refugiado comprendido en lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante denominada “Convención sobre los refugiados”) o en el artículo 1 del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

(Retiro del reconocimiento de la condición de refugiado)

Artículo 61-2-2. El Ministro de Justicia retirará el reconocimiento de la condición de refugiado si el extranjero residente en el Japón que ha sido reconocido como refugiado está comprendido en alguna de las situaciones siguientes:

- 1) Cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 1, párrafo C, incisos 1) a 6), de la Convención sobre los refugiados;
- 2) El extranjero ha realizado una de las acciones descritas en el artículo 1, párrafo F, incisos a) o c), de la Convención sobre los refugiados después de haber sido reconocido como refugiado.

2. Cuando el Ministro de Justicia retire el reconocimiento de la condición de refugiado, notificará por escrito al extranjero interesado, indicando las razones correspondientes, y publicará un anuncio en la *Gaceta Oficial* comunicando la pérdida de validez del Certificado de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y del Documento de Viaje para Refugiado de dicho extranjero.

3. Cuando un extranjero a quien se haya expedido el Certificado de Reconocimiento de la Condición de Refugiado o el Documento de Viaje para Refugiado reciba la notificación del retiro del reconocimiento de la condición de refugiado en la forma descrita en el párrafo anterior, deberá devolver sin demora al Ministro de Justicia el certificado o el documento indicados.

(Averiguación de los hechos)

Artículo 61-2-3. El Ministro de Justicia puede disponer que un Investigador sobre casos de Refugiados proceda a una averiguación de los hechos, si existe la posibilidad de que no se pueda llegar a un adecuado reconocimiento de la condición de refugiado exclusivamente sobre la base de los datos suministrados en la forma dispuesta en el artículo 61-2, párrafo 1, o si se estima necesario para considerar el reconocimiento o el retiro de la condición de refugiado.

2. El Investigador sobre casos de Refugiados puede pedir que las personas interesadas comparezcan y puede formularles preguntas o solicitarles que presenten los documentos que sean necesarios para la averiguación descrita en el párrafo anterior.



3. El Ministro de Justicia o el Investigador sobre casos de Refugiados pueden hacer averiguaciones ante las oficinas públicas o las organizaciones públicas o privadas y pedir que se les presenten informes sobre los hechos pertinentes.

• **Párrafo 3, inciso g)**

– *¿La legislación del Japón garantiza que la alegación de motivos políticos no se reconozca como fundamento para denegar solicitudes de extradición de supuestos terroristas?*

53. Se ha establecido la interpretación de que los delitos relacionados con el terrorismo como tal no se consideran “delitos políticos” que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de extradición serían fundamento para la denegación.

• **Párrafo 4**

– *¿El Japón ha tenido en cuenta alguna de las preocupaciones expresadas en el párrafo 4 de la resolución?*

54. El Japón está determinado a fortalecer la cooperación con los demás países en la campaña mundial de lucha contra el terrorismo. A fin de examinar los vínculos entre el terrorismo internacional y el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales, el Japón está trabajando en estrecho contacto con otros países en foros internacionales tales como el G8.

• **Otros asuntos**

– *¿Puede el Japón presentar un organigrama de la estructura administrativa que haya establecido, por ejemplo en materia de autoridades de policía, control de la inmigración, aduanas, impuestos y supervisión financiera, con el fin de hacer efectivas en la práctica las leyes, reglamentos y demás documentos que se considera que contribuyen al cumplimiento de la resolución?*

55. Se adjunta un organigrama de la estructura administrativa de los ministerios y organismos encargados de las medidas de lucha contra el terrorismo (anexo 3).

56. Después del 11 de septiembre de 2001, se celebró una serie de reuniones interministeriales bajo los auspicios de la Secretaría del Gabinete. Los ministerios y organismos competentes están cooperando plenamente a fin de aplicar, en cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, medidas de lucha contra el terrorismo, entre ellas, medidas para mejorar el control de la inmigración, fortalecer los esfuerzos por obtener información relacionada con el terrorismo, fortalecer los sistemas de seguridad y las medidas de seguridad en los aeropuertos con el fin de evitar los secuestros de aeronaves y otros incidentes, fortalecer la respuesta al terrorismo que haga uso de agentes nucleares, bacteriológicos y químicos, fortalecer la seguridad de importantes instalaciones en el Japón y mejorar los sistemas de inspecciones aduaneras y aplicarlos plenamente.

57. Las medidas de lucha contra el terrorismo se han aplicado constantemente sobre la base de las “siete medidas concretas” decididas en una reunión ministerial sobre las medidas de lucha contra el terrorismo celebrada el 19 de septiembre de 2001, así como sobre la base de las “medidas de respuesta de emergencia” decididas en una reunión de la Autoridad Central de Emergencia de Lucha contra el Terrorismo

celebrada el 8 de octubre de 2001 (Jefe de la Autoridad Central: Primer Ministro; Jefe Adjunto de la Autoridad Central: Secretario Principal del Gabinete; miembros: los ministros de los 16 ministerios competentes).

Las “siete medidas concretas” son las siguientes:

- 1) Tomar las medidas prontas necesarias para despachar a la Fuerza de Autodefensa a fin de prestar apoyo, incluso servicios médicos, transporte y suministros, a las fuerzas de los Estados Unidos y otras fuerzas en los esfuerzos relacionados con los ataques terroristas, que han sido reconocidos como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales en la resolución 1368 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
- 2) Tomar las medidas prontas necesarias para seguir fortaleciendo la protección de las instalaciones y zonas de las fuerzas de los Estados Unidos y las instalaciones importantes en el Japón;
- 3) Despachar rápidamente buques de la Fuerza de Autodefensa para reunir información;
- 4) Fortalecer la cooperación internacional, incluso compartiendo la información, en esteras tales como el control de la inmigración;
- 5) Brindar la asistencia necesaria de carácter humanitario y económico y de otra índole a los países circundantes y afectados;
- 6) Prestar asistencia a las personas desplazadas;
- 7) Tomar medidas apropiadas en respuesta a los cambios en la situación a fin de evitar la confusión en los sistemas económicos internacional e interno.

Las “medidas de respuesta de emergencia” son las siguientes:

- 1) Fortalecer las medidas de seguridad a fin de garantizar la seguridad del pueblo del Japón;
- 2) Garantizar la seguridad de los nacionales japoneses en el extranjero y prestar asistencia para la evacuación;
- 3) Trabajar con el fin de obtener a la brevedad la sanción del proyecto de Ley de medidas especiales de lucha contra el terrorismo y otras medidas legislativas de asistencia;
- 4) Prepararse para instrumentar la asistencia a los refugiados, así como la asistencia de carácter humanitario y económico y de otra índole a los países afectados;
- 5) Tomar medidas para responder a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en lo tocante a la congelación del capital y los activos de los terroristas y utilizar los mecanismos de vigilancia del blanqueo de dinero con el fin de cortar la financiación de los terroristas;
- 6) Aplicar las siguientes medidas en cooperación con las naciones pertinentes a fin de asegurar la estabilidad del sistema económico del Japón y del mundo frente a la amenaza del terrorismo;
- 7) Suministrar con rapidez y exactitud la información necesaria al pueblo del Japón.